

Crisis del régimen e inestabilidad del modelo de acumulación

La coyuntura económica del golpe

Juan Romero

La crisis política que se vive en Honduras producto del golpe de Estado llevado a cabo por las cúpulas empresariales, instituciones políticas y el ejército es necesario analizarla teniendo como marco referencial la gran recesión en que se encuentra el conglomerado económico mundial. Y es precisamente la actual crisis económica mundial la que ha puesto de relieve los grandes destrozos que el neoliberalismo ha dejado luego de casi veinte años de su aplicación.

Dicho esto, se hace pertinente dar un vistazo a la metamorfosis que sufrió el modelo económico que predominó en Honduras durante casi todo el siglo XX: el paso de la república bananera a un nuevo modelo que aún no termina de configurarse parece ser una de las causas materiales del actual estallido de las instituciones del régimen.

LA REPUBLICUETA BANANERA Y SU “ESTABILIDAD POLÍTICA”

Los primeros intentos por establecer una estructura estatal a finales del siglo XIX fueron los proyectos de la reforma liberal de Marco Aurelio Soto, proceso mediante el cual se abren las puertas del país a la inversión extranjera, al tiempo que los principales cuadros intelectuales y políticos se vinculaban a los negocios de las primeras transnacionales que incursionaban en la explotación de la riqueza de mineral del territorio. Es aquí donde también se establecen los primeros proyectos de infraestructura económica, como la creación de mecanismos de recaudación y administración de los recursos estatales.

Además de la inversión minera, a inicios del siglo XX llegó la inversión en el cultivo y exportación del banano, que luego de unas dos décadas se converti-

ría en la base de la economía nacional y por tanto en el principal producto de exportación.

Las primeras tres décadas del siglo anterior fueron el lapso en el que se consolidaba el negocio del cultivo del banano, de alto consumo en Estados Unidos y Europa. Alrededor de él se configuraban diversos negocios, como la Vaccaro Brothers and Company, que mediante concesión dada por Manuel Bonilla construye la línea ferroviaria en la Ceiba, en el litoral atlántico del país, estableciendo pronto también una institución financiera que hasta estos días se mantiene (Banco Atlántida), fábricas de refrescos, hielo, jabones y aceites, azúcar, licores, zapatos.

Este período está marcado por el enfrentamiento entre compañías fruteras: por un lado, la Vaccaro Bros., y por el otro la Cuyamel Fruit Company de Samuel Zemurray. A tal grado que ambas empresas organizaban los movimientos armados para el derrocamiento de presidentes en función de los intereses de una u otra. Tal es el caso de Manuel Bonilla, apoyado por la United Fruit Company para enfrentar a las fuerzas de Terencio Sierra y Juan Ángel Arias, que no permitieron la asunción de Bonilla.

Al iniciarse la Gran Depresión en Estados Unidos en la década de 1930, Honduras era el mayor productor de bananas del mundo, y era el mercado norteamericano el principal consumidor de esta fruta. Por esta razón, se ve afectada tremendamente la economía nacional. Ante este hecho, las compañías bananeras deciden poner al frente un *régimen duro* que permitiera controlar el descontento que se venía dando como producto de los masivos despidos y el cierre de algunas fincas.

Ese régimen es encabezado por Tiburcio Carias Andino, que establece una dictadura de trece años bajo el emblema de castigar a su oposición con la fórmula “encierro, destierro y entierro”; esto le permitió instaurar una política de cruda austeridad, reduciendo salarios a los trabajadores públicos y de las compañías fruteras.

Los ejemplos antes planteados son una pequeña muestra del giro que toma la política durante casi cien años: el *control absoluto de las instituciones estatales y de la política económica del Estado por parte de las compañías bananeras*. Esto era lo que permitía la “estabilidad política” en el sentido de que los gobiernos eran garantes de las ganancias de las empresas y por lo tanto de los pequeños socios nacionales de éstas, que obtenían prebendas y regalías gracias a su servilismo.

Los distintos gobiernos obtenían apalancamiento financiero con fondos provenientes de las arcas de la United Fruit Company, a cambio de ventajosas concesiones y la desgravación de las importaciones de alimentos, insumos y maquinaria agrícola.

Incluso la creación de instituciones como el Banco Nacional de Fomento y lo que comprende todo el gabinete económico era controlado por estas transnacionales.

EL FRACASO DE LA FÓRMULA REAGAN

Con el correr de las décadas, el modelo de enclave bananero fue entrando en decadencia. En la década del 70 se inicia la reestructuración de la política económica, en la que predominaba la producción agrícola para la exportación, cuando en casi toda América Latina se gestan las políticas “desarrollistas”, cuyo eje central era la “industrialización para la sustitución de las importaciones”. Un esquema que supuestamente buscaba consolidar estados nacionales autónomos, independientes política y económicamente.

Pero con la creciente deuda externa de estos países (proveniente de los grandes préstamos para el financiamiento de proyectos en los que los administradores del Estado y sus socios comerciales eran los más beneficiados), la sustitución de las importaciones no alcanzaba para el pago de los compromisos externos (compuestos por las utilidades de las empresas extranjeras y los intereses de los préstamos otorgados por las agencias de financiamiento internacional).

Esto justifica la campaña en contra de la participación del Estado en la economía y propicia el momento justo para introducir la nueva política económica, que buscaría corregir los errores de los malos administradores.

El “Plan de Acción Inmediata”, presentado al gobierno de Suazo Córdova, se convierte en la base inicial del plan de ajustes y realineamientos sobre las reglas del mercado, el rumbo del financiamiento externo y las características de los nuevos gestores del “desarrollo nacional” (los tecnócratas neoliberales).

Ocurre entonces una especie de solapamiento de dos políticas económicas que no logran transición adecuada: la primera buscaba generar “desarrollo” mediante el incentivo a la producción con ventaja comparativa permitiendo la gestión estatal; la segunda buscaba desplazar la intervención del Estado y priorizar la inversión privada, fundamentalmente la extranjera.

En este nuevo contexto, tiene mucha importancia la llamada Iniciativa para la Cuenca del Caribe, que representaba para los países centroamericanos la exoneración de impuestos a la exportación de productos hacia Norteamérica. Este esquema privilegia el comercio exterior y en lo interno infunde políticas de austeridad para los gobiernos y la población.

En esta misma década se ven dos problemas en la economía del país: la escasez de divisas y la inflación, que exigen instrumentos de política económica que permitieran la reactivación, como incentivo y diversificación de exportaciones, control de importaciones, promoción de la inversión externa, restricción del crédito y no emisión de moneda; todo esto para no modificar el tipo de cambio, es decir, evitar la devaluación de la moneda.

La balanza comercial de Honduras en este período es negativa y provoca desequilibrios como los señalados, penuria de divisas e inflación.

Es en este período que se comienza a configurar la inestabilidad de los nuevos gobiernos; Suazo Córdova intenta realizar reformas constitucionales y se enfrenta a la oposición incluso en su propio partido, a lo que se sumó el pacto que se vio forzado a realizar con las fuerzas armadas comandadas por el gene-

ral Gustavo Adolfo Alvares Martínez, a quien se le atribuye ser “el poder detrás del trono”.

El gobierno de José Simón Azcona también desde sus inicios tiene que implementar negociaciones entre los diversos sectores de la cúpula política y empresarial para establecerse, a tal grado que se da un proceso electoral en el que se tuvo que juntar los votos de todos los candidatos liberales para derrotar al candidato del Partido Nacional, Rafael Leonardo Callejas, jugada que se hace por fuera de las reglas establecidas para los comicios.

Esto es, *ya las reglas del juego político no eran definidas por las transnacionales bananeras*, que para entonces, aunque conservaban importante fuerza e injerencia en los gobiernos, no gozaban de un poder absoluto como en décadas atrás. La línea política ahora tenía que ser *negociada entre los gerentes de las transnacionales, sus pequeños socios nacionales y los agentes de los organismos de financiamiento internacional*.

LAS MEDIDAS NEOLIBERALES Y LOS GOBIERNOS FRACCIONADOS

La década del 90 representa en nuestro país el boom de las medidas neoliberales y el intento por consolidar un nuevo modelo de acumulación que sustituyera la republiqueta bananera, que ya venía dando sus últimos suspiros. En ese afán, se impulsa la apertura a la industria maquilera y las transnacionales de servicios, se liberalizan algunas empresas estatales y se incentiva la exportación de productos como café, tabaco, melón, camarón y otros, la mayoría no tradicionales.

Este decenio se caracteriza por la mayor intervención del imperialismo norteamericano y el férreo control de la política económica por parte del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los planes de ajuste económico estaban a la orden del día, y se venía la avalancha de privatizaciones para disminuir las obligaciones del Estado y garantizar la amortización de la deuda externa y el déficit presupuestario (que para el gobierno de Rafael Callejas era de 1.150 millones de lempiras).

Para resolver este grave problema, el presidente del “cambio” (consigna de Callejas en 1989 y que ahora usa Porfirio Lobo) necesitaba establecer un durísimo plan de ajuste estructural, que incluye, entre otras medidas, el incremento al impuesto sobre la venta del 5% al 7%, la privatización de empresas públicas como la Corporación Nacional de Inversiones e incrementos en el impuesto por servicios de las vías públicas. Por otro lado, se redujeron los gravámenes aduaneros y las escalas de la renta neta gravable para las empresas. Respecto del tipo de cambio, se inicia una devaluación progresiva del lempira, a la vez que se impulsa la mercantilización de la tierra mediante la “ley de modernización agrícola”.

Los gobiernos posteriores al ajuste estructural continúan con el proyecto llamado “modernización del Estado”, que consistió en la creación de nuevas instituciones que vinieran a “mejorar” la administración pública. Así se crean el

Ministerio Público, el Consejo Nacional Anticorrupción y el Tribunal Superior de Cuentas, entre otros. Además, se implementan medidas como la “subordinación” de las fuerzas armadas al poder ejecutivo y la separación de la elección de diputados y alcaldes del presidente. Todas estas medidas, aunque de carácter político-administrativo, buscan precisamente establecer la “autonomía” de los poderes del Estado. Pero esto responde precisamente a un hecho político de mucha trascendencia: *el Estado había dejado de ser controlado por un solo sector económico*, y ahora se venían las pugnas de las cúpulas por dominar la mayor parte del “pastel público”.

Esto se da porque la política económica desplegada a partir de 1990 prioriza el comercio exterior, privilegiando aquellos negocios vinculados a las transnacionales y sobre todo otorgando muchas ventajas a la inversión externa, dejando desprotegido el comercio “nacional” ante las grandes corporaciones multinacionales.

Ante este panorama, *la única tabla de salvación es el arca estatal, que garantiza los contratos jugosos, las desgravaciones, las concesiones casi regaladas y los permisos para la explotación de recursos naturales. Aquí es donde radican los principales motivos del constante enfrentamiento entre los grupos económicos*, ya que los negocios por la vía “normal” y legal no venían bien, y había que tener otra carta bajo la manga, fuera el erario nacional o el narcotráfico.

NINGÚN PROYECTO MACROECONÓMICO LOGRA CONSOLIDARSE: NI LAS MAQUILAS, NI EL TLC, NI LAS REMESAS

Después de 1998, con el paso del huracán Mitch, la situación económica se precariza aún más, pues este desastre natural destruye gran parte de la infraestructura económica. Ante esta nueva realidad, tanto el gobierno de Carlos Flores como el de Ricardo Maduro buscan encauzar la salida por tres vías. En primera instancia las maquilas, con las que se busca crear fuentes de empleo en las zonas que antes eran epicentros de los campos bananeros como La Lima, El Progreso, Choloma, Villanueva y la misma capital industrial, San Pedro Sula. Pero a la industria de la maquila se la conoce como “industria golondrina”, por su carácter inestable. Compañías como Fruit of the Loon, Gildan y otras traen desgravadas su materia prima y maquinarias de Estados Unidos y otros países, alquilan parques industriales y sacan la mercadería terminada sin pagar impuestos. Lo único que deja esta industria es el miserable pago a los obreros y obreras, que rondan los 130.000 en todo el país. La producción, aunque en cifras forma parte del PIB, en la realidad no es parte de la riqueza nacional (y en este sentido se puede decir que continúa con el carácter de “enclave” que tenía la producción bananera en el siglo XX).

En segundo lugar, se apuesta al *ingreso fluido de divisas* provenientes de los miles de hondureños y hondureñas que habían emigrado del país hacia Estados Unidos. Este rubro ahora representa un importante renglón de ingresos nacionales: el comportamiento en los últimos tres años, según el Banco Central, ha

sido de 2.328 millones de dólares en 2006, 5.461 millones en 2007 y 2.800 millones en 2008.

Como se verá adelante, ya viene desmejorando. Por las características de las familias que reciben remesas, este dinero, del que además las agencias de cambio se quedan con buena parte y que no entra en dólares, sólo es *destinado al consumo*; buena parte de éste va a las cuentas de las transnacionales de servicios y las que venden bienes de consumo masivo como Wal Mart (que en este país tiene tiendas en las principales ciudades). Nuevamente la *“lógica de enclave”*: *el capital entra, permanece corto tiempo y se va; no produce riqueza ni acumula*.

Y, por último, está la aprobación del TLCEUCA-RD (Tratado de Libre Comercio de Centro América, Estados Unidos y República Dominicana), del que se esperaba significara la principal carta de juego de los empresarios. Pero no ha logrado empalmar con la escasa producción nacional, y más bien ha descapitalizado el Estado con los progresivos desgravámenes a la importación, se agudiza el déficit de la balanza comercial y la industria nacional se ha visto desplazada, como es el caso de la industria del calzado, en la que han quebrado cientos de pequeñas fábricas.

Un informe oficial del Banco Central muestra el comportamiento de la balanza comercial en los primeros dos años de Tratado de Libre Comercio, con datos que muestran claramente el desbalance provocado por las transacciones internacionales, que descapitalizan al Estado y lo obligan a buscar financiamiento externo para la compra de mercancías en el exterior.

El panorama evidencia que *ninguna de estas tres “estrategias” dio resultado y ni siquiera logró consolidarse como proyecto de estructuración macroeconómica* que diera empuje a la históricamente macilenta economía catracha. Lo único que ha garantizado es la ganancia de las transnacionales, que en los últimos años ha acentuado su presencia en más sectores, principalmente de servicios.

LA ECONOMÍA HONDUREÑA MESES ANTES DEL GOLPE DE ESTADO

Honduras ha experimentado un rápido contagio de los efectos de la crisis económica mundial por su *alta dependencia del consumo en el mercado norteamericano y la Unión Europea*, países que ahora son el centro de la más grave debacle económica y financiera después de la gran depresión de la década del 30. Este estrecho vínculo ha provocado que de inmediato se empiece a materializar la desaceleración en los principales rubros generadores de ingresos de divisas en el país.

Los primeros datos de la crisis bailan relativamente al mismo son que se toca en el país del norte: según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), en el último semestre se han registrado por lo menos 120.000 despidos. Sólo en el sector maquila hay ya unos 8.000 obreros cesanteados. Hasta marzo de 2009, 8 plantas maquiladoras de la zona norte cerraron operaciones

y 11 más han solicitado ya la suspensión temporal de trabajadores y trabajadoras. Se calcula que en 2009 serán unas 300 las empresas que tengan que cerrar. Pero estas cifras podrían ser más dramáticas, pues no se tienen datos sobre la pérdida de fuentes de trabajo en el sector informal de la economía, que hasta ahora alberga la gran masa desocupada del país: el 58% de los empleos en Honduras son informales.

En el rubro de las remesas el asunto también está desmejorando: según el Banco Central, el ingreso por esta vía se redujo en debido a la pérdida de empleo por parte de los hondureños en los Estados Unidos, de los que también en promedio unos 200 están siendo deportados a diario. Desde Europa también se ve la disminución del ingreso de euros, ya que en el último trimestre de 2008 se registra una caída del 21% en comparación con 2007.

En el sector agropecuario también ya se perfilan malos resultados. En el café, por ejemplo, según los reportes del Instituto Hondureño del Café, la exportación se redujo en 353.000 quintales, un 19% de caída. También bajan el precio y consumo de melones y otras frutas en EE.UU., lo que trae consigo la reducción de venta de insumos agrícolas en un 35% y el posible cierre de grandes productores de tabaco en Danlí, que se estarían trasladando hacia Estelí, Nicaragua.

Por otro lado, los efectos de la crisis también se dejan ver en la recaudación del Estado, según informes de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI): en el primer bimestre de 2009 la recaudación bajó unos 444 millones de lempiras, una disminución del 22%, debido a la disminución de pedidos del mercado norteamericano y la disminución de las importaciones, pero también a la afectación que provocan las exenciones otorgadas por el TLCEUCA-RD.

A nivel del consumo hay dos elementos a los que hay que prestar mucha atención: por un lado, el acelerado e incontrolable aumento de los productos básicos, ya que el costo de una canasta básica de 30 alimentos ya está en 6.200 lempiras, 700 lempiras por encima del salario mínimo. Y, por otro lado, ya se refleja una disminución en el consumo de otros bienes: se verifica un descenso del 14% en las ventas al detalle.

También se ven los efectos a nivel de la mora en las instituciones financieras. En un informe de la Comisión Nacional de Banca y Seguros se estima que la mora bancaria sube del 4,6% en diciembre de 2008 a un 5,1% en enero de 2009, reflejando la pérdida de empleos, y en las empresas, la caída en sus ingresos.

LA ECONOMÍA TRAS EL GOLPE DE ESTADO

Ya en los últimos meses la situación se precariza más. Luego del golpe de Estado algunos analistas aseguran que la economía hondureña sufrirá un daño similar al que provocó el huracán Mitch e incluso mayor. El descenso del Producto Interno Bruto (PIB) tendrá una magnitud del 4%, y el desempleo se expandirá a niveles superiores al 7%.

Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en manos de los golpistas, muchas empresas se vieron obligadas a hacer “recortes laborales”, pues no tienen la capacidad para pagar el sueldo base a sus trabajadores. Esta misma oficina dice que *los niveles de desempleo y subempleo estarían llegando a entre 60 y 70% de la población económicamente activa*. A este deterioro se sumará la caída de los ingresos fiscales y una extensión de la pobreza al 70% de la población.

Debido a la crisis global, la reducción en las remesas familiares que envían los inmigrantes en Estados Unidos acumula en los primeros siete meses de 2009 una caída del 8,5%. La crisis política en que quedó sumido el país por el derrocamiento de Zelaya se convierte en caldo de cultivo para que este tipo de situaciones afecte más el bolsillo de los hondureños.

Como parte de los intentos por salir del ahogo financiero, el gobierno de facto inició la emisión de bonos de deuda para el mercado local por unos 37 millones de dólares. El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras prevé este año un severo decrecimiento de la economía del 4%, tras crecer esa cifra en 2008.

La venta de vehículos nuevos bajó un 60%, según los empresarios. Los toques de queda decretados por el régimen de facto de Roberto Micheletti afectaron los negocios y provocaron recortes de personal en bares, restaurantes y hoteles, algunos de los cuales reportan niveles de ocupación del 30% o menos. El FMI condicionó a la estabilización política la reanudación de programas, Estados Unidos suspendió 30 millones de dólares de ayuda y la Unión Europea congeló 95 millones y la cooperación al desarrollo.

Según la ministra de “Cooperación Internacional” del gobierno de facto, Vicka Martell, se afectó un 30% de la “colaboración”, y no es más porque “había sido negociada años antes”, aunque España la retiró toda. También los proyectos de infraestructura de la “Cuenta del Milenio”, que en el corto plazo van a paralizarse, traerán una importante cesantía de obreros. La única medida propuesta por los empresarios golpistas es la media jornada laboral, que intenta precarizar aún más las condiciones de la clase obrera del país. Pretenden pagar menos a los trabajadores y al mismo tiempo *generalizar la tercerización*, que se ha puesto de moda en los últimos años. Además este lapso en el que el COHEP y la ANDI “recuperan” el control con el gobierno de facto han aprovechado para garantizar contratos leoninos paralizados y mejorar otros que ya tenían.

UN MODELO ECONÓMICO Y UN RÉGIMEN POLÍTICO QUEBRADOS

Es claro ahora que el golpe de Estado militar perpetrado el 28 de junio no va dirigido únicamente contra los sectores burgueses vinculados a Manuel Zelaya, y que las razones para llevarlo a cabo exceden las propuestas de consulta popular que Zelaya pretendía hacer. El golpe de Estado es una respuesta a dos hechos de mayor relevancia: por un lado, *asestar un duro golpe a la creciente organi-*

zación de las masas, que en los últimos seis años había logrado significativos avances. Es el caso de la lucha de 2003 contra la privatización de los servicios de agua potable, las conquistas del magisterio tras las luchas de 2004 y 2006, la organización de los paros cívicos nacionales en 2008 para exigir las reivindicaciones salidas del primer Encuentro Obrero Campesino y Popular y la organización política de un sector importante de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular alrededor de la Candidatura Independiente Popular.

Pero también este golpe de Estado tiene la intención de *recuperar el control del Estado* por parte de un sector burgués que años atrás, con los gobiernos de Carlos Flores y Ricardo Maduro, había asegurado sus negocios, y que con la intervención de Zelaya “arriesgaba” su continuidad.

Se trata entonces de afirmarse en los tres poderes, el Congreso Nacional que garantiza las leyes, una Corte Suprema de Justicia que dictamine favorablemente cuando se trata de defender sus negocios, y hacía falta un Presidente y consejo de ministros que contratara sólo las empresas del sector que está en el poder. Precisamente este sector es el que administra la dictadura: grupos financieros, comerciales y de las telecomunicaciones vinculados al comercio exterior y las transnacionales.

La inestabilidad y permanente crisis de la economía, bajo este modelo, no deja riquezas en el país, pues las transnacionales llevan sus ganancias al país de origen y el socio nacional las invierte en negocios del exterior, lo que *paraliza casi por completo la producción para el mercado interno y fuerza la importación de bienes de primera necesidad* como granos básicos.

De esta manera, los negocios internos “legales” no funcionan, y la única manera de garantizarlos es copar el dinero público o la alternativa del narcotráfico, ya que en los últimos días se ha incrementado el número de nuevos empresarios vinculados a este jugoso negocio.

Éste es el detonante de los enfrentamientos y pugnas entre los sectores burgueses previos al 28 de junio, y el golpe de Estado responde a esta dinámica. Había aquí *una contradicción entre un modelo económico inestable, que responde más a las ganancias de las transnacionales, y un sector en el gobierno antes del golpe –el melismo– que buscaba revitalizar el consumo interno aumentando el salario mínimo*.

Ahora las condiciones son claras: en la medida en que no se estabilice –y, definitivamente, no va a estabilizarse bajo el neoliberalismo– la estructuración de la economía, la dinámica de conflictos por arriba no va a estabilizarse, y menos aún los enfrentamientos y contradicciones entre las clases. El modelo actual ya no acumula riqueza; más bien provocó que millones de hondureños y hondureñas vivan ahora en las peores condiciones de miseria.

La “estabilidad política” que el siglo anterior permitían las transnacionales del banano ya no existe, pues *todas las instituciones del régimen están desquebrajadas, deslegitimadas y lo van a estar por largo tiempo*, ya que el modelo económico del libre comercio no permite la primacía de un sector económico.

A lo anterior ahora se le agrega el nuevo ingrediente de una sociedad polarizada, en la que la discusión política en todos los estratos se renueva y toma mucha importancia, condiciones que anuncian un panorama interesante para la lucha de clases, con un debate que ahora cuestiona el neoliberalismo como culpable del sufrimiento de millones de seres humanos.